BASES Y PERSPECTIVAS DE UN PROYECTO ACADÉMICO PARA EL SIGLO XXI

Santiago, 19 de mayo de 2009

Estimados y estimadas colegas. Estimados y estimadas ayudantes. Estimados y estimadas estudiantes. Estimado señor Presidente del Centro de Estudiantes de Derecho. Estimado señor Decano.

No ha sido posible para quienes suscribimos esta breve presentación exponer ante los estudiantes de la Facultad nuestra visión acerca de los desafíos que enfrentamos como Escuela de Derecho. Dos de nosotros consideramos a la actual toma como una medida ilegítima, uno como una medida legítima que no se ha renovado mediante el mecanismo de la votación. Esta visión del proceso nos ha impedido que asistamos a la toma. Sin embargo, tenemos interés en los temas académicos que se contenían en el petitorio votado en el referéndum y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que los mismos sean debatidos por toda la comunidad académica en un espacio de respeto mutuo y de quieta reflexión.

Hemos manifestado nuestra preocupación por la grave acusación de plagio que pesa sobre el Decano. Esperamos que la misma se aclare en el menor tiempo posible siguiendo los cauces institucionales que están operando actualmente. En todo caso, cualquiera sea la decisión definitiva sobre este asunto, que como hemos visto ha venido tomando distintos rumbos según cambia la información y la línea argumentativa a la que se recurre por los denunciantes, entendemos que deberá nuestra comunidad universitaria enfrentar numerosos desafíos académicos.

Como es obvio no reconocemos a ningún profesor o grupo de profesores superioridad moral sobre nosotros. No aceptamos que nadie ponga en tela de juicio nuestro derecho a decidir sobre los destinos de la Escuela. En primer lugar porque somos profesores de la misma y por ende tenemos esta prerrogativa. En segundo término porque no es admisible, bajo ningún punto de vista, que se nos prive de este derecho por la circunstancia de no haber pedido la renuncia del decano o no haber participado en la toma. Desde el inicio del conflicto hemos tomado una posición y exigimos respeto para la misma, máxime, cuando está apegada a la legalidad vigente y a un auténtico espíritu universitario.

Todos los firmantes consideramos legítima la toma en circunstancias extraordinarias. La rechazamos como un medio ordinario de presión y acumulación de fuerza.

Hemos sido nosotros los que no hemos cesado en llamar al diálogo entre las partes; los que hemos llamado a deponer la toma porque causa un daño

gravísimo a la Facultad; los que con la misma fuerza hemos pedido que se aclare de una vez las imputaciones al decano; y también que se inicie la discusión serena, pausada, propiamente universitaria sobre los temas que comprendía el petitorio de los estudiantes así como las nuevas temáticas que han surgido luego de iniciada la toma.

En la actual coyuntura no nos identificamos con el llamado “grupo de los siete”, ni con el autodenominado “grupo 5 de mayo”, ni con el grupo que apoya irrestrictamente al Decano. No somos ciegos ante las omisiones de la máxima autoridad de la Escuela, ni hemos perdido nuestra capacidad crítica frente a algunos errores en que pudiere haber incurrido ya sea en su conducta estrictamente personal o en su ejercicio del poder como decano. Sin embargo, consideramos dicho poder como legal y, hasta la fecha, como legítimo, y entendemos que su eventual remoción sólo puede producirse en un contexto de respeto irrestricto al Estado de Derecho.

No está demás decir que nos sorprende el silencio en que estuvimos los profesores y en particular los que hoy día critican ácidamente al decano. Fue necesario que los estudiantes se movilizaran para escucharlos. No hay ninguna declaración, artículo o escrito de cualquier naturaleza, de carácter público que anticipara la conducta de la casi totalidad de quienes hoy día destrozan la labor del decanato.

Creemos que dado lo prolongado de la toma ya se viene incurriendo en lo que la literatura denomina las “trampas cognitivas” en la negociación: (i) el escalamiento irracional, entendido este como la intensificación del conflicto de manera que pierde sentido; ii) la percepción partidista, consistente en el fenómeno psicológico de que el punto de vista que se defiende corresponde a la única verdad; y iii) la de negociar con expectativas no razonables, como es para este caso aspirar a concretar una renuncia que al exigirse paraliza toda negociación.

Llamamos nuevamente a las partes, y este es nuestro tercer llamado, a transformar este escenario adverso y a no dejarse atrapar por los que sólo aspiran a profundizar dramáticamente las diferencias de los actores en conflicto: ellos no dudan en utilizar incluso un lenguaje cargado de agresividad y nula disposición al entendimiento.

Somos una comunidad y debemos restaurar las confianzas que harán posible que actuemos como un solo cuerpo para enfrentar los numerosos y relevantes desafíos que nos esperan después de esta toma.

Presentamos a continuación un conjunto de ideas centrales que a nuestro juicio vienen a enriquecer la discusión y que podrían ser consideradas como

insumo para el debate. Esperamos desarrollarlas a cabalidad una vez que la Escuela vuelva a la normalidad.

Vivir en la Sociedad de la Información: los verdaderos desafíos para Chile y su Pueblo

La transformación violenta del mundo universitario llevada a cabo por el régimen cívico militar de carácter dictatorial en la década de los ochenta del siglo XX, agregó al "campo" universitario una variable que lo transformó radicalmente: se abrió un "mercado" de la Educación Superior, donde muchos oferentes pueden participar y competir. La Universidad de Chile cambia entonces de "estatus", pasando a erigirse en un privilegiado, mas no único actor en este nuevo "campo" o "mercado".

Como primer corolario de lo anterior, la Universidad paulatinamente debe comenzar a competir por cosas que antes le eran naturales o consustanciales: la captación de los mejores estudiantes; el financiamiento público, la adjudicación de proyectos de investigación, etc. Sin embargo, el alma de la Universidad y su acervo cultural la mantienen como ente hegemónico (no monopolístico ni único). Su vocación laica, meritocrática, nacional, pluralista y democrática, son su activo intangible.

El modelo de país que se forjó en la amalgama de liberalismo económico, estado nacional asimilador y fuerte de fines del siglo XIX, y que entronca en el estado de compromiso del siglo XX, tuvo de la mano, como poder fáctico hegemónico a la Universidad de Chile. La investigación, la extensión, la creación y transmisión del conocimiento del llamado "saber superior", son funciones que ha realizado fundamentalmente esta casa de estudios, de la mano o, si se quiere, como un brazo más, del Estado.

La historia no se agota y es así como desde fines del siglo XX y sobre todo a partir del siglo XXI, vienen configurándose nuevos desafíos que son mucho más relevantes que el surgimiento de un cuadro de abierta competencia por recursos, por estudiantes y por académicos.

Los retos que presenta la sociedad de la información y el conocimiento son ineludibles: o las organizaciones los enfrentan, o caen en la entropía o mueren como actores del nuevo orden mundial que se viene configurando. Asistimos a una auténtica revolución, que ha tenido mucho de reformismo acelerado, en las formas de producción así como en la organización social y la cultura. La actual crisis del capitalismo ha hecho más lento el proceso, sin embargo, parece que ya es irreversible.

Mientras Chile cambiaba acelerada, violenta y radicalmente su modelo institucional de Educación Superior como consecuencia de las políticas implementadas por la dictadura cívico militar, el mundo enfrentaba también una revolución radical desde el punto de vista de la información, la comunicación y los "saberes tradicionales".

La sociedad de la información viene alterando las nociones acerca del aprendizaje, como consecuencia de ello se ha venido cuestionando la forma tradicional del quehacer universitario en el aula, así como la actividad de investigación, la extensión de los saberes y la transmisión del conocimiento.

La rapidez y facilidad con que se puede alcanzar el conocimiento, la información, o si se quiere la existencia de miles de datos accesibles para cualquiera usuario, y la fluidez con que aquéllos pueden circular, dejan al docente y el estudiante universitario tradicional en una dramática posición de desorientación.

Hemos pasado de la conciencia del conocimiento finito, enclaustrado en nuestras bibliotecas, a la infinitud de las fuentes de acceso a los saberes. La confianza excesiva de las instituciones de educación superior en sus títulos profesionales, como crisol de un cúmulo suficiente de saber, también está en entredicho, ya que la *obsolescencia de los saberes*, otro elemento característico de la sociedad de la información, se hace patente hoy en día en forma mucho más rápida que hace veinte años atrás. Baste ver la demanda actual de profesionales por formación continua y el éxito de los programas de postgrado que ofrecen actualización de conocimientos.

Regularmente oímos discusiones y arengas románticas, las más de las veces voluntaristas, que expresan el deseo irracional de que el mundo y nuestro país no hubiese cambiado como lo ha hecho, o no hubiese tomado la senda a la que se ha dirigido.

La Universidad de Chile ha sido fiel en este tránsito a su vocación fundacional y ha sabido redefinir su rol en el tiempo actual en una lúcida proyección que permita no sólo su subsistencia en el siglo XXI, sino su influencia, relevancia y rol hegemónico. Entre otras cosas porque sus miembros actúan con la certeza que la suma total de la actividad de la Universidad encarna lo más profundo de las convicciones consustanciales a la democracia: la incorporación de los mejores estudiantes y profesores, sin exclusiones que no tengan que ver con su mérito académico, en un marco de total tolerancia ideológica y religiosa, insertos en una cultura laica y que, al mismo tiempo, cultiva el pluralismo. Porque la universidad está abierta y atenta a las necesidades de su tiempo es que florece el saber superior.

Lamentablemente el control que ejerce el capitalismo sobre las nuevas tecnologías ha implicado que se introduzca en esta nueva forma socioeconómica y cultural las inequidades y abusos característicos del dominio liberal burgués. La Universidad de Chile tiene, de acuerdo con el carácter imperativo de su Estatuto, el deber de impulsar una sociedad sustentable, equitativa, meritocrática, es decir, la obligación ineludible de contribuir a que los beneficios del nuevo orden estén al alcance de la generalidad de la sociedad chilena.

La Facultad de Derecho no puede permanecer ajena a este proceso. Los ritmos de su incorporación a esta discusión han sido, al parecer, más lentos de lo que debiese haber sido. Pero no es ni el peso de nuestra historia, ni las efímeras discusiones en situaciones extremas, en que suelen monologar minorías de estudiantes e incluso de algunos profesores *en toma*, lo que nos va a orientar para constituirnos en el escenario del siglo XXI en la institución relevante que tenemos vocación de ser.

Si aceptamos como proposición lo que hemos señalado de la sociedad de la información, tenemos que reconocer dos fenómenos: la *obsolescencia de los saberes*, lo que nos lleva a reflexionar sobre el plan de estudios y la necesidad de la *educación significativa, centrada en el aprendizaje*, y las *simetrías de información* entre docentes y estudiantes, lo que nos invita a la reflexión sobre los roles del docente en el aula y los *activos* que el estudiante posee como sujeto del proceso de aprendizaje.

¿Qué valor intrínseco, entonces, tiene un grado académico universitario? ¿Qué significa poseer un título profesional otorgado en la Universidad? ¿Qué significado relevante para enfrentar los desafíos de la sociedad actual tiene un grado académico otorgado en la Universidad de Chile y en su Facultad de Derecho? ¿Qué roles nuevos, entonces, debe cumplir el docente universitario? ¿Cómo debe enfrentar a sus estudiantes, muchas veces más informados en muchas materias?

¿Qué es lo que no puede pasar en la Universidad actual, a la luz de estas reflexiones? El plan de estudios no puede centrarse en un cúmulo finito de conocimientos estáticos sobre la materialidad de lo que, suponemos, es lo que "tiene que saber" un abogado (v.gr. las normas, los procedimientos).

El docente no es un sabio maestro omnisciente dispuesto a entregar conocimientos (información) a un estudiante ignorante.

El estudiante no es un receptáculo pasivo de conocimientos (información).

¿Qué debemos hacer?

El plan de estudios debe considerar los contenidos materiales del conocimiento jurídico (normas y procedimientos), pero además, debe incorporar el juicio crítico (principios, filosofía e historia de las mismas) y las habilidades de aprendizaje permanente. Y debe contemplar, también, formas de medir y certificar *competencias laborales*, lo que implica la necesaria relación de la universidad con el mundo del trabajo, con el mercado de trabajo.

El docente debe redefinir su rol. No es decisivo para su caracterización que sabe más (cantidad y variedad de información) que los estudiantes, sin embargo, debe poseer algo que el estudiante naturalmente no posee: la capacidad para integrar los conocimientos, los saberes, y los valores, para poder transmitir a sus estudiantes el conocimiento, el acervo valorativo y las actitudes hacia el saber. Debe motivar sus capacidades intelectivas para disponerlos a aprender, presentar los contenidos en base a objetivos académicos previamente definidos, representarlos, y finalmente, cuestionar y juzgar el desempeño de sus estudiantes. Esto diferencia la información de la formación.

El estudiante, por su parte, juega un rol dialéctico, debe hacer la síntesis del proceso a fin de incorporar el conocimiento y disponerse a la práctica y la cultura de integración del saber superior, sin perder de vista los valores y las actitudes que sirven de base a la formación de competencias laborales o profesionales, desde las genéricas hasta las específicas.

La reflexión en consecuencia debe hacerse teniendo presente qué tipo de juristas necesita el Chile de hoy, y cuya formación hará de nuestra Facultad una unidad académica necesaria, relevante, seria, señera y con proyección hacia el futuro.

La institución Universidad de Chile ha decidido implementar en todas las carreras que imparte, el currículum por competencias y una didáctica centrada en el aprendizaje de los estudiantes. Ninguna de estas expresiones aparece en los documentos que ha generado la toma. Esta es una de las cuestiones fundamentales a discutir ¿cómo se entiende el petitorio de los estudiantes en un contexto institucional de apoyo a la formación por competencia y una didáctica centrada en el aprendizaje de los estudiantes? ¿Qué estándares de calidad cabe configurar a propósito de estos desafíos institucionales? ¿Cómo se entiende la investigación y la extensión en este contexto? ¿Cómo se hace compatible el currículum sociocrítico enunciado en el Estatuto, norma jurídica vinculante, con la formación basada en competencia? ¿Qué características presenta el profesorado que hace posible una formación basada en competencias y al mismo tiempo la implementación de un currículum sociocrítico?

Tanto o más importante de determinar si habrá cuatro o cinco jornadas completas por departamento es establecer para qué fines cabe contratarlas. E insistimos que estos fines ya están determinados en una medida importante.

Asistimos a un parto de una criatura que nacerá envejecida

A partir de la información que se entrega por el blog de la toma constatamos que se está produciendo el mismo lamentable error en que se incurrió al debatir la llamada Reforma Bascuñán: hay un pequeño grupo de profesores en la Facultad que mantiene una visión de los temas académicos a partir de categorías propias de las discusiones de la década de 1960 y 1970. Si esta perspectiva resulta dominante la toma será la partera de un proyecto que nacerá viejo.

Una reforma para la Universidad

Hay en marcha desde hace ya varios años un proceso de reforma curricular que viene impulsado desde la Casa Central y que cuenta con el apoyo de la institucionalidad legal y legítima que configura nuestro marco de acción. Nuestra Escuela ha sido reacia en incorporarse a esta ola de cambios. La información que proporciona el blog de los estudiantes indica que tampoco la toma está abierta a la implementación de la política general fijada por Rectoría y el Senado Universitario en esta materia.

Afirmamos responsablemente que existe un deber jurídico ineludible de los miembros de nuestra comunidad académica en avanzar hacia una convergencia completa con la política fijada en las instancias centrales.

La Reforma del Pregrado proporciona los elementos teóricos, el discurso, con el cual debemos ordenar nuestras deliberaciones.

Alcances del Proyecto de Desarrollo Institucional y del proceso de acreditación de la Universidad de Chile

Lo que sea una formación de calidad no está entregado a la libre discusión de la comunidad académica de la Escuela. No seremos nosotros los que de manera autónoma vamos a definir qué debe entenderse por formación de calidad y qué por un profesional abogado de calidad.

Precisamente aquí está el cambio que los partícipes en la toma (estudiantes y profesores) no conocen, o si lo conocen, no quieren asumir. La primera medida de nuestra calidad es la mayor o menor cercanía de nuestra actividad académica con las medidas propuestas en el Plan de Desarrollo Institucional. Mayor será la calidad de nuestro trabajo mientras más nos acerquemos a las metas fijadas en el PDI institucional.

Pero no basta con ello. Pesa sobre la Escuela de Derecho la obligación de acreditarse como consecuencia de los deberes de la Universidad de Chile con el sistema nacional de acreditación. Por ende, la calidad del trabajo de la Escuela se medirá a partir de los estándares que fija la ley de acreditación no siendo suficientes los que fije, por sí y ante sí, un grupo de profesores y estudiantes en toma.

Planteamientos y peticiones de los estudiantes

A partir del blog de los estudiantes en toma hemos podido acceder a cuatro documentos que condensan las peticiones y propuestas de los estudiantes en esta toma. A modo de síntesis se pueden señalar el siguiente listado de temas que resultan relevantes para los estudiantes: A) Cuestiones administrativas: uso de salas, evaluaciones de rezagados, ranking público de los estudiantes. B) Trato a los Académicos: Situación de los profesores que forman parte del claustro, votan y no imparten clases; profesores invitados que imparten cursos obligatorios; concursos públicos abiertos; evaluación de todos los profesores cualquiera que sea su área; suspensión del concurso público convocado el día 19 de abril; constitución de una comisión de calificación académica; C) Claustro: de tipo triestamental; D) Encuesta de evaluación docente; E) Regularización del claustro de profesores antes de las próximas elecciones de decano. F) Regularidad en la celebración de Consejos de Facultad; G) Equipamiento de la biblioteca; H) Departamentos. Presupuesto propio; supervisión de sus políticas; I) Memoria: reforma de los talleres de memoria; J) Examen de Grado: Reforma del cedulario; grabación del examen; examinación de todas las materias sin que se pueda reprobado antes de que se pregunte cédula, civil y procesal; constitución del defensor del estudiante; K) Programas de curso: Contenidos mínimos como obligatorios; libertad de cátedra restringida; L) Investigación: presupuesto propio; M) Extensión y publicación: unidad autónoma y centralizadora; N) Extensión estudiantil; fomentada por las autoridades, O) Reforma 2002. Evaluación.

De mayor entidad son las propuestas relativas a la formación de una Comisión de Normalización; la formación de un claustro que elabore un PDI; suspensión de ciertas facultades que ostenta el Consejo de Escuela; elecciones de Decano y de Directores de Escuela; creación de nuevas cátedras; mejoramiento de la calidad de vida de académicos y estudiantes; fortalecimiento de la democracia interna; exigencia de transparencia administrativa; financiamiento de investigación con fondos propios; autonomía de la investigación respecto de los departamentos; nueva contratación de académicos; situación laboral de los funcionarios.

En relación con estas demandas entendemos que varias de ellas pueden ser satisfechas a nivel de dirección de Escuela bastando para esto sólo una

orientación precisa del decanato al respecto; otras ya se encuentran plenamente satisfechas en el Estatuto vigente por lo que sólo cabe insistir en la necesidad de que la normativa sea eficaz.

Dado que sólo alguna de las peticiones requieren una discusión en profundidad, es claro que la satisfacción de la mayoría de las mismas no modificará sustancialmente la actividad cotidiana de la Facultad. En la misma medida no vemos obstáculo alguno en la satisfacción de muchas de ellas. Desde ya solicitamos por este medio a la autoridad que estudie cómo implementarlas. Será necesario en todo caso, restablecida que sea la normalidad, darlas a conocer a toda la comunidad académica para escuchar su opinión al respecto y en su caso, si se aprueban, implementarlas.

Respecto de las cuestiones de fondo, ellas requieren un tiempo mayor de reflexión porque las decisiones que se adopten tendrán efectos relevantes para el mediano y largo plazo. Por lo mismo no pueden ser discutidas en este contexto de fuerza porque la toma impide la libre y mayoritaria participación de todos los diferentes puntos de vista presentes en la Facultad.

Concursos urgentes

Nos parece que hay que realizar en el curso de este semestre y de modo urgente, al menos dos contrataciones de jornadas completas en departamentos claves como Derecho Civil, Derecho Procesal, Derecho Laboral, Ciencias del Derecho. Por exigencias del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Chile y de los niveles de excelencia a que aspiran los estudiantes en toma, el concurso público debe poner como requisito que los postulantes ostenten el grado de Doctor.

Conductas cuestionables del cuerpo académico atendiendo a su carácter de funcionarios públicos

Nos preocupan algunas conductas de profesores que desconocen derechamente los deberes funcionarios a que se encuentran sujetos.

Resulta importante recordar que la Facultad de Derecho está inserta jurídicamente en la Universidad de Chile y que no se trata de un mundo autónomo. En consecuencia, toda discusión académica que en ella se verifique tiene que atender a los caminos que sean compatibles con sus principios, su visión y misión.

La generación, desarrollo, integración y comunicación del saber en todas la áreas del conocimiento y dominios de la cultura conforman la misión de la

Universidad de Chile, la que se caracteriza por tratarse de una institución de educación superior nacional y pública que se constituye en relación a la nación chilena como reserva intelectual caracterizada por una conciencia social, crítica y éticamente responsable en relación a los problemas y necesidades del país.

Asimismo, la misión universitaria se debe cumplir por medio de su comunidad respetando los principios y valores que la inspiran, cuales son, la libertad de pensamiento y expresión, el pluralismo y la participación de sus miembros en la vida institucional con resguardo de las jerarquías inherentes al quehacer universitario.

Queremos recalcar que cualquier discusión respecto del funcionamiento, organización, gobierno, y administración de la Universidad de Chile, reside en la comunidad universitaria y en consecuencia, tales temáticas pueden ser planteadas legítimamente por cualquier miembro de la comunidad, pero resguardando las jerarquías inherentes a la actividad universitaria y en consecuencia los procedimientos adecuados para tales efectos. Si no existen los procedimientos o canales para tales discusiones, es deber también de los miembros de la comunidad universitaria presentar el proyecto normativo correspondiente al rector o al senado universitario, órganos superiores de la Universidad con facultades normativas al efecto.

Hemos visto en estos días que algunos profesores no sólo han tomado parte sino que han incentivado en los alumnos la mantención de una toma, acto contrario a la paz. Al apoyar su mantención han vulnerado el principio de la participación legítima en la discusión universitaria.

Pero no sólo han apoyado la toma, han alegado ante la autoridad superior de la Universidad la ingobernabilidad de la Facultad omitiendo toda mención a que con sus actos vienen contribuyendo a mantener en el tiempo una medida de fuerza que siempre es un recurso de tipo excepcional.

Si recordamos además que el académico de la Universidad de Chile es aquél que tiene un nombramiento vigente y una jerarquía académica en ella, y que realiza una labor de docencia superior, investigación, creación o extensión integrado a los programas de trabajo de las unidades académicas de la universidad, su conducta o comportamiento debe atender a los principios universitarios y acatar sus reglas.

Los académicos de la Facultad de Derecho son también empleados públicos y se sujetan a las normas de la administración del Estado, debiendo dar cumplimiento a las obligaciones que emanan de la Ley General de Bases de la Administración del Estado, de la Ley de Probidad Administrativa, del Estatuto Administrativo, de la Ley General de Educación Superior, del Estatuto de la

Universidad, de los reglamentos de facultad y de las instrucciones de los superiores jerárquicos.

En virtud, entonces, de principios de derecho público creemos que no corresponde a los profesores arrogarse más atribuciones que las que se les haya conferido por las leyes. Menos todavía pasar por alto la función del contralor interno de la Universidad, y del Contralor General de la República al cuestionar la legalidad de un acto administrativo del superior jerárquico, en este caso el Rector de la Universidad, quién posee privativa y legítimamente la facultad jurisdiccional disciplinaria sobre los académicos, estudiantes y funcionarios de la universidad.

Asimismo, cuestionamos la conducta de miembros de la comunidad universitaria que pasando por alto la autoridad y los procedimientos de los órganos superiores de la Universidad, han solicitado el nombramiento de un decano subrogante, desconociendo nuevamente la normativa al efecto, toda vez que el ingreso, permanencia, promoción o desvinculación de los integrantes de la comunidad universitaria obedecerá únicamente a méritos o causales objetivas, con arreglo a la ley, y sin sujeción a discriminaciones de carácter arbitrario. Existe una disposición expresa que señala que los cuestionamientos de gobernabilidad de una facultad deben ser debatidas en el interior de su Consejo de Facultad para proponerse las medidas necesarias al Rector.

En síntesis, desde la perspectiva funcionaria, podemos decir que se ha faltado a deberes jurídicos consistentes en (i) no respetar la jerarquía del órgano superior, (ii) afectar el normal funcionamiento y desarrollo de las actividades universitarias, así como (iii) poner en riesgo de manera irresponsable la imagen institucional y su prestigio ante los ojos de la sociedad chilena.

Que unos pocos no nos priven del derecho a decidir nuestro destino

Hemos sido testigos en estos días del trabajo acelerado de un grupo indeterminado de estudiantes y profesores para configurar una propuesta que exprese las demandas académicas contenidas en el petitorio votado en el referéndum. Sería lamentable que la comunidad universitaria pensara que la obra de estudiantes y profesores en toma es la única voz representativa de nuestro claustro. Observamos con preocupación que una parte menor de estudiantes, y mucho menor de profesores, se arroguen el derecho a tomar decisiones a nombre de más de 2000 estudiantes y de centenares de profesores.

Una cosa es que los profesores y estudiantes que participan en la toma alcancen consensos sobre su propuesta, y otra muy distinta que la misma sea calificada como expresión de voluntad de la comunidad académica.

Fracaso de la toma como experiencia de vida cuando prima la violencia

La manera en como se ha estado llevando la toma ha permitido que los valores que caracterizan a un movimiento de este tipo se expresen como experiencia de vida imborrable (trabajo en equipo, solidaridad, lealtad, etc.). Sin embargo, en los últimos días se vienen desarrollando en grado sumo las actitudes que amenazan siempre a un movimiento que recurre a la fuerza: la intolerancia; el desprecio del diálogo racional y emotivo con el adversario; la elevación del opositor a la calidad de enemigo; el uso de un lenguaje con un alto contenido de lesividad respecto de quien no comparte las ideas promovidas en la toma. Todo lo cual es dañino como experiencia de vida: Cuando cierto profesorado arenga a los estudiantes diciendo que se está en guerra, la toma deriva en una nefasta experiencia comunitaria.

De la excepcionalidad no pueden derivarse reglas permanentes.

Por otra parte, dado el carácter de excepcionalidad que se está viviendo no pueden emanar de este proceso reglas permanentes obligatorias para el conjunto de la comunidad que se vio impedida de participar en la toma, cualquiera sea la motivación para esta ausencia.

La toma como amenaza a la estabilidad del gobierno superior de la Facultad

A mayor abundamiento cabe hacer notar que de verificarse la renuncia del Decano, como consecuencia de la medida de fuerza, quien le suceda en el cargo quedará preso de la amenaza de una toma por no ser garantía para los estudiantes.

Derecho al diálogo

Exigimos la reanudación inmediata del diálogo. Extendemos nuevamente y por tercera vez nuestra invitación a los dirigentes de los estudiantes y al Sr. Decano, quien ya manifestó el día de ayer en la Radio Universidad de Chile, su voluntad positiva al respecto.

Invitamos a los colegas y estudiantes a apoyar esta petición de inicio de las conversaciones. Ya hay una iniciativa a este respecto <http://www.facebook.com/group.php?gid=81816589098&ref=nf> y en <http://estudiantesyacademicosporeldialogo.blogspot.com>

ALVARO FUENTEALBA

BENITO OJEDA

ERIC EDUARDO PALMA

PS: Remitimos copia de este documento al Senado Universitario y al Sr. Rector.